



ANTES Y DESPUÉS DE «CÁDIZ».
LA SOBERANÍA RECONSTITUIDA

Alberto Ramos Santana
Universidad de Cádiz



Cuando el 24 de septiembre de 1810 comenzaron las sesiones de las Cortes en el teatro de la Real Isla de León, tras la elección del presidente, cargo que recayó, en segunda votación, en Ramón Lázaro de Dou, y del secretario, elegido también en segunda votación Evaristo Pérez de Castro, y tras darse por enteradas las Cortes del escrito que dejó la Regencia antes de retirarse sobre la posible elección por el congreso de un nuevo gobierno, tomó la palabra Diego Muñoz Torrero para pedir que se decretara «que las Cortes generales y extraordinarias estaban legítimamente instaladas; que en ellas reside la soberanía», indicando que un diputado, Manuel Luján, traía una propuesta al respecto. Dicha propuesta es el origen del primer decreto de la Cortes proclamando solemnemente el principio de la soberanía nacional:

«Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional».

Como apuntó Antonio Fernández García¹, la ausencia de taquígrafos no nos permite conocer cómo fueron los discursos de Muñoz Torrero y Luján, aunque cabe pensar que la memoria leída por el segundo quedó reflejada en el primer decreto. Es sabido que el acta de la primera sesión, recogida en el *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, se escribió posteriormente, sin embargo la crónica que sobre la primera sesión publicó *El Conciso* del 26 de septiembre de 1810 coincide en su descripción con lo relatado en dicha acta. Efectivamente, quizás con menos detalle de nombres², el periódico recoge la declaración de la soberanía, e, incluso antes de describir lo ocurrido en la sesión parlamentaria, al aludir al escrito dejado por la Regencia para su lectura en las Cortes, afirmaba con cierta vehemencia:

«¡Pueblo español! ya está dignamente representada tu soberanía en los diputados que tu elección y la suerte propicia han conducido al santuario de la patria.»

El texto constitucional ratificaría definitivamente que la soberanía reside en la Nación, y que la representan, en su nombre los diputados reunidos en Cortes, cuando declaraba en el artículo 3º que «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de estable-

cer sus leyes fundamentales», y en el artículo 27º que «Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá».

Iniciar las sesiones de las Cortes con la declaración de que la soberanía residía en las mismas, y que los diputados reunidos para su constitución representaban a la Nación española era esencial, pues fijaba, desde el primer instante, el carácter rupturista de la reunión de Cortes, y reasunción de la soberanía por parte de la Nación, que la había depositado en un monarca que no podía ejercer por estar preso. Y, al mismo tiempo, suponía la confirmación del rechazo absoluto a la renuncia «forzada» de Fernando VII en Bayona y a la legitimación de José I al asumir la corona española que había recibido por cesión del monarca español.

Vacío de poder y formación de juntas soberanas

El proceso que conduce a la reasunción de la soberanía en las Cortes el 24 de septiembre, ratificado en la Constitución de 1812, comenzó, si se quiere indirectamente, con la revuelta de Aranjuez iniciada la noche del 17 de marzo de 1808, revuelta que, además de terminar con el gobierno de Manuel Godoy, apuntaba a la abdicación de Carlos IV y la entronización

del príncipe Fernando, renuncia al trono de Carlos que, justificada por razones de salud en un texto que se le presentó a la firma, el monarca signó la tarde del 19. Sin embargo, dos días más tarde se arrepentiría Carlos IV de su forzada abdicación y publicó el famoso manifiesto que terminaba:

«Protesto y declaro que todo lo manifestado en mi decreto del diez y nueve de Marzo abdicando la Corona en mi Hijo, fue forzado, por precaver mayores males, y la efusión de sangre de mis queridos vasallos, y por tanto de ningún valor. Yo el Rey. Aranjuez y marzo veinte y uno de mil ochocientos y ocho»³.

A pesar de la protesta de su padre, el 24 de marzo entraba triunfalmente en Madrid el recién proclamado Fernando VII. Horas antes había entrado en la capital el general Joaquín Murat, lugarteniente de Napoleón, del que Fernando VII trató de lograr su reconocimiento como rey de España, casi al mismo tiempo que Carlos IV le envió una carta protestando por los acontecimientos de Aranjuez y «poniéndose en todo y por todo a su disposición»⁴, dejando claro, padre e hijo, que Napoleón se había convertido en el árbitro de la situación.

La disputa dinástica, y la posición dominante de Napoleón, se vieron confirmadas con los viajes de la

familia real –Carlos IV por una parte, y Fernando VII por otra–, a Bayona, donde ambos confiaban en que Napoleón les apoyara en el trono de España. En Madrid quedaba una Junta Suprema de Gobierno, que, sin recursos apenas para el ejercicio de la autoridad, recibió instrucciones de Fernando de mantener buenas relaciones con el jefe del ejército francés. El desenlace en Bayona es suficientemente conocido. La doble renuncia de Carlos IV y Fernando VII propician que la corona española pase a José Bonaparte, mientras que se convoca y celebra la Asamblea de Bayona para dar a los españoles una Constitución.

Sin embargo, los planes de Napoleón para consumir el cambio dinástico en España se torcieron con los acontecimientos del 2 de Mayo de 1808, cuando parte del pueblo de Madrid se enfrentó a la guarnición francesa para impedir la marcha de la restante familia real y, sobre todo, cuando la sublevación contra los franceses se generalizó por España en los últimos días del mes de Mayo siguiendo siempre un esquema similar, lo que le da un carácter casi de unanimidad a la reacción contra las tropas francesas.

Efectivamente, tras el dos de mayo madrileño, parece ser que las insurrecciones comenzaron en el levante español, en Cartagena, donde el 22 de mayo se sublevaron oficiales y marineros de la flota, en Murcia los estudiantes provocaron tumultos el 24 de mayo, y en

Valencia, tras un motín provocado por dos franciscanos y los hermanos Bertrán de Lis, y tras el famoso «crit del pallater», la Junta que se formó declaró la guerra a Napoleón el 25 de mayo⁵. Sin embargo, y sin olvidar el tumulto que se organizó en Zaragoza el 24 de mayo, hay que recordar que ya el 9 de mayo el pueblo de Oviedo había manifestado su hostilidad contra los franceses, una protesta en parte apaciguada que estalló definitivamente el 24 de mayo. Y en Andalucía, por ejemplo, la insurrección comenzó en Sevilla el 26 de mayo, desde donde irradió hacia otras capitales andaluzas.

Si la sublevación tuvo éxito en diferentes puntos de España fue porque se presentó la intromisión francesa en los asuntos del país no sólo como una usurpación de la dinastía, sino, lo que parece más importante, como un ataque a valores tradicionales del Antiguo Régimen asumidos por el pueblo español, como una agresión a principios ideológicos y mentales como la religión, la monarquía tradicional española y la independencia.

Y, por otra parte, lo que nos interesa más recordar ahora es que la ausencia de los reyes provocó una situación de vacío de poder que, ante la falta de autoridad de la Junta de Gobierno, y la nula reacción del Consejo de Castilla, sólo pudo cubrirse con la formación de unos poderes nuevos, sustitutivos, emanados de la «voluntad popular»: las Juntas locales y provin-

ciales, que asumieron la soberanía en nombre del pueblo y la nación.

Es evidente que existió una gran disparidad, incluso contradicciones, en los planteamientos ideológicos de las Juntas⁶, así como que el sustrato ideológico de las mismas no era popular. En este sentido hay que recordar que el nivel cultural, incluso de alfabetización de los españoles era muy bajo, por lo que no puede extrañar que, tras los tumultos callejeros, fueran llamados a dirigir los nuevos organismos hombres relacionados con el poder en la etapa precedente, incluso autoridades anteriores y las «fuerzas vivas», de esta forma «el pueblo», voluntaria o forzosamente, no accedió a los recién formados órganos de gobierno, de manera que, como se ha dicho, «no fue el pueblo llano quien protagonizó, más allá de los primeros meses, el movimiento revolucionario»⁷. Pero también está claro que con la formación de las Juntas sus protagonistas eran conscientes de que el pacto entre la Nación y el monarca para la cesión de la soberanía había quedado anulado y que la Nación asumía de nuevo la soberanía. La Nación soberana fue el fundamento ideológico de las Juntas para declarar la guerra a Napoleón en defensa de la independencia de la patria.

En la constitución de la Junta de Gobierno de la Real Isla de León, efectuada el 2 de Junio de 1808, y en la proclama que publicaron ese mismo día, tene-

mos ejemplo de ambos aspectos, la composición social de una Junta con personajes relacionados con el poder en la etapa inmediata anterior, y la asunción de la soberanía por la Nación insurrecta, que en consecuencia tenía derecho a pactar de nuevo su realidad social y política. La proclama decía:

«Españoles, nobles fieles habitantes de la Real Isla de León: La ambición del tirano de Francia ha llegado a nuestro territorio. El que pudo con la fuerza y con la astucia erigirse monarca de su nación misma, ha sabido con el engaño invadir el suelo español y destronar la Familia Real, usurpando la Corona al poseedor.

Napoleón, llamado protector y auxilio de un príncipe desgraciado, ha sido el mayor enemigo, que atacó su inocencia, causándole el despojo de su Trono contra los más sagrados derechos. Fernando VII es nuestro Rey por la abdicación solemne del 19 de Marzo, sin que lo impida ni una protesta inválida ni una renuncia forzada hecha entre las armas francesas en aquel país extranjero. Cuando estuviésemos por la separación de los derechos al Trono (que no estamos), aun entonces no habría de constituirse éste en Napoleón, **por pertenecer a la Nación el dominio de la Corona**. Sí, españoles: un Rey erigido sin potestad no es Rey, y **la España está en el caso de ser suya la soberanía por la ausencia de Fernando**, su legítimo poseedor»⁸.

La proclama de la Real Isla de León, que deja patente la idea de la soberanía de la Nación asumida de nuevo por la ausencia del rey según el planteamiento pactista, estaba suscrita, en nombre de los habitantes de la Isla de León, por toda una representación del poder social y político del régimen estamental:

«El Alcalde Mayor interino de la villa, D. Juan de Santa Cruz; D. Miguel de Armida, Cura rector de la iglesia parroquial, por el estado eclesiástico; el Marqués de Ureña, por la nobleza; D. Francisco María de Yepes, Capitán de Navío de la Real Armada; D. José Rodríguez de Camargo, Comisario de Marina, por el Ministerio de Marina; D. Antonio Roberto Valois, por el Ayuntamiento y como su Regidor decano; el licenciado D. Francisco de Paula Vilches, Abogado de los Reales Consejos, por el pueblo; D. Bartolomé Canle Gómez, para Secretario»⁹.

Aunque otras proclamas y manifiestos de las mismas fechas no expresan con tanta nitidez la noción de soberanía de la nación, no cabe duda de que cuando se habla por ejemplo de la representación del pueblo, o de la restauración de la monarquía a través de la lucha patriótica, se está aludiendo a ella. Se puede comprobar ya cuando tras la insurrección en Oviedo el 24 de mayo, se publicó¹⁰ una «Proclama de la Junta

General del Principado» redactada por el Procurador General del Principado, Alvaro Flórez Estrada, en la que, tras anunciar que el Principado de Asturias le había declarado formalmente la guerra a Francia, los «representantes» del pueblo llaman a las armas a los asturianos para defender al Rey, recordando que ya Asturias, en alusión a Covadonga, había restaurado la Monarquía:

«Asturianos leales y amados compatriotas, vuestros primeros votos ya están cumplidos. El Principado, en desempeño de aquellos deberes que más interesan al hombre, ya ha declarado formalmente la guerra á la Francia. ¿Os amedrenta acaso tamaña resolución? Mas ¿qué otro partido podía, ni debía tomar? ¿Se hallará uno entre todos nosotros que prefiera la muerte vil é ignominiosa de la esclavitud á morir en el campo del honor con las armas en la mano, defendiendo nuestro infeliz Monarca, nuestros hogares, nuestros hijos y esposas? Si en el mismo momento en que esas tropas de bandidos estaban recibiendo los mayores obsequios y favores de los habitantes de Madrid, han asesinado fríamente más de dos mil personas sin otro motivo que haber defendido sus hermanos insultados, ¿qué pudiéramos esperar de ellos después que nos hubiesen dominado? Su perfidia con nuestro Rey y toda su Familia, engañándole para hacerle pasar á Francia bajo la palabra de un eterno ar-

misticio, para encadenarlos á todos, no tiene igual en la historia. **Su conducta con toda la Nación** es más inicua que la que debíamos de esperar de una horda de hotentotes. Han profanado nuestros templos, han insultado nuestra religión, han faltado á toda la fe prometida, y no hay derecho alguno que no hubiesen hollado.

¡Al arma, al arma, Asturianos!

No nos olvidemos que **Asturias en otra irrupción, sin duda menos injusta, ha restaurado la Monarquía.** Aspiremos á igual gloria en la presente época. Sepamos que jamás nos pudo dominar nación alguna extranjera por más esfuerzos que ha hecho. Invoquemos al Dios de los Ejércitos; pongamos por intercesora á Nuestra Señora de las Batallas, cuya imagen se venera en el anti-quísimo templo de Covadonga, y seguros de que no puede abandonarnos en causa tan justa corramos á aniquilar y arrojar de nuestra Península nación tan pérfida y tan execrable. **Así os lo pide en nombre de vuestros Representantes** el Procurador General del Principado Álvaro Flórez Estrada»¹¹.

Una línea similar sigue la proclama dada en Cartagena el mismo día 24 de mayo, suscrita por Vicente de Obando y Obando, marqués de Camarena la Real y coronel del Regimiento de Valencia, que había sido elegido para presidir el gobierno de la ciudad, y se dirige a la población para recordarles que «a vuestro gusto y

elección han sido [elegidos] los vocales» de la Junta, por lo que recomendaba calma, alistamientos «con método», y terminaba reconociendo a los vocales como verdaderos representantes de la voluntad popular:

«La obediencia y confianza os encargamos; y esperad en Dios y en la justa causa en que todos interesamos, y lograréis vuestros apreciables fines, ratificando la elección de vuestros representantes, y por ellos, sin conmoción sabremos vuestros espíritus y vosotros el nuestro»¹²

La proclama publicada en Sevilla el 29 de mayo de 1808 no deja lugar a dudas sobre la asunción de la soberanía por la Junta sevillana. Ya el propio título, «Grito general de la Nación», expresa la intención de demostrar que los elegidos en la Junta Suprema de Gobierno de Sevilla representan a los españoles, a la Nación española en unas circunstancias difíciles. Pero más allá, la Proclama manifiesta con claridad que la soberanía reside en la Nación, que la propia monarquía no es propiedad del rey que la representa, sino de la Nación, que es el pueblo quien cede la soberanía al rey, y que en mayo de 1808, preso el Rey, la recuperaba para cederla temporalmente a una nueva forma de gobierno, la propia Junta, a la que se reviste de todos los poderes:

«Españoles: Sevilla no ha podido resistir los impulsos de su heroica lealtad, de que ha dado ejemplo en todos los siglos. Se le ha arrebatado el Rey que ha jurado y había recibido con una alegría de que no hay memoria. Se han pisado las leyes fundamentales de la monarquía, se amenazan los bienes, los usos, las mujeres y cuanto tiene precioso la nación.

»[...] **El pueblo pues de Sevilla se juntó el 27 de mayo**, y por medio de todos los magistrados y autoridades reunidas y por las personas mas respetables de todas las clases **creó esta Junta Suprema de Gobierno, la revistió de todos sus poderes**, y le mandó defendiese la religión, la patria, las leyes y el Rey. Aceptamos encargo tan heroico, juramos desempeñarlo, y contamos con los esfuerzos de toda la Nación. Precedió antes proclamar y jurar de nuevo por nuestro rey al Sr. D. Fernando VII y morir en su defensa y este fue el grito de la alegría y el de la unión, y lo será para toda la España.

»[...] Menos podía detenernos el acto de renuncia de la monarquía en un príncipe extranjero, ilegal y nulo con suma evidencia por la falta de poder en quien lo hizo, **pues la monarquía no era suya, ni la España se componía de animales al arbitrio absoluto del que nos gobernaba**, y había entrado a su señorío por el derecho de la sangre como él mismo lo confiesa, y por las leyes fundamentales de la monarquía, que reglan invariablemente la sucesión hereditaria.

»[...] Españoles: la patria con todos vuestros bienes, con vuestras leyes, con vuestra libertad, con vuestros reyes, con vuestra santa religión y con las esperanzas de una vida eterna que solo esta religión promete y puede hacer conseguir a vosotros y a vuestros descendientes, están en manifiesto, en próximo, en inminente peligro. Sevilla 29 de Mayo de 1808. Por disposición de la suprema Junta de Gobierno. Don Juan Bautista Esteller, Secretario primero. Don Juan Pardo, Secretario segundo»¹³.

Como hemos visto en los ejemplos citados y en otros muchos en los que no nos detenemos ahora¹⁴, siempre se alude a que, en la formación de las Juntas, había participación popular, una iniciativa del pueblo que, en el caso de la Junta de Cádiz de 1808, podemos constatar documentalmente.

Tras el levantamiento de Sevilla el 26 de Mayo, visitó al gobernador de Cádiz, Francisco de Solano, el conde de Teba, enviado por los insurrectos sevillanos para tratar de provocar la reacción de Cádiz. La situación en la ciudad era muy difícil, pues los restos de la flota francesa, tras la derrota de Trafalgar, comandada por el almirante Rosilly, estaban en la bahía, mientras que una flota inglesa bloqueaba el puerto de la ciudad desde 1805, sin que se supiera a ciencia cierta qué actitud tomarían los ingleses en caso de iniciarse la insurrección en Cádiz. Las dudas de Solano ante la

situación provocaron que en algunos corrillos se acrecentara el rumor del posible afrancesamiento del marqués del Socorro, lo que ocasionó un tumulto callejero exigiendo la declaración de guerra contra Francia. Como es conocido, la cautela de Solano terminó costándole la vida.

La muerte de Solano no calmó a la población amotinada, los disturbios callejeros continuaron y otras autoridades de la ciudad sufrieron ataques y destrozos en sus propiedades, entre ellas Francisco Huarte, Regidor Perpetuo de la ciudad.

Tras la muerte del marqués del Socorro, y con la aquiescencia de la Junta Suprema de Sevilla, fue aclamado como su sucesor Tomás de Morla —que había participado en la Junta formada por Solano—, quien no pudo evitar que el tumulto continuara por las calles de Cádiz. Para tratar de apaciguar los ánimos, Morla ordenó publicar una proclama¹⁵, que según Castro había sido redactada por su antecesor, anunciando que se enfrentaría a los franceses y reclamando calma y confianza en los que ostentaban el mando militar y político en la ciudad. El mismo día 30 de mayo Morla reunió a los jefes militares y acordaron separar los buques españoles de los franceses, quedando ambas flotas preparadas para el combate, aunque oficialmente no había síntomas de hostilidad por ambas partes.

Mientras tanto en la ciudad continuaron produciéndose algunos incidentes, lo que hizo que Morla publicara un aviso conminatorio a los revoltosos. Sin embargo la tranquilidad se logró en la ciudad gracias a la acción de algunas personas que no formaban parte de los grupos dirigentes. El día 31 de mayo, después de que los regidores hubiesen acudido a la catedral a realizar rogativas, se celebró un cabildo municipal extraordinario en el que se manifestó la necesidad de que se jurase como rey a Fernando VII. La iniciativa no partió de los regidores, pues según el acta capitular correspondiente, ante los regidores «se presentó dn. Antonio Fernández uno de los individuos que contribuían a la pacificación y tranquilidad de este vecindario en las actuales inquietudes que fermentan sus ánimos», pidió audiencia y, en nombre del «pueblo gaditano», exigió se «verificase la Real Proclamación y Jura» de Fernando VII, anunciando que así lo había decidido ya con Tomás de Morla y que habían acordado se hiciese en el Ayuntamiento ese mismo día a las dieciocho horas¹⁶. Como se puede comprobar, la intervención de Antonio Fernández, de quien de momento nada más sabemos, que realiza en nombre del pueblo gaditano, confirma que es una iniciativa popular la que provoca la jura del rey, con todas sus consecuencias, es decir, una demostración de la voluntad del pueblo gaditano obligó a las autoridades locales a juramentar a Fernando VII y con-

dujo también a la declaración formal de guerra a Francia. Efectivamente, esa misma tarde, a las 18 horas, en un nuevo cabildo extraordinario se proclamó y juró a Fernando VII como Rey de España e Indias¹⁷.

El juramento era la consumación del acto de desobediencia al francés, y tras realizarlo, Tomás de Morla, en reconocimiento de su autoridad, y quizás para salvaguardar su responsabilidad, pidió a la Junta de Sevilla autorización para atacar a la escuadra francesa, que, tras cinco días de enfrentamientos, se rindió y fue apresada el 14 de junio de 1808¹⁸.

Un poder soberano y fuerte. La Junta Central

También iniciativas particulares, en este caso de un hombre de formación intelectual, dotaban de argumentos sobre la soberanía a la población española, al tiempo que reclamaban un poder unificado y fuerte. Sirva de ejemplo la publicación, en agosto de 1808 en Valladolid, del *Voto de un español*, proclama atribuida a Antonio Peña¹⁹, que contiene una contundente argumentación sobre la nación y el pueblo español como depositarios de la soberanía:

«Españoles: no basta vencer ejércitos enemigos para vivir felices. Es necesario reformar nuestras instituciones

políticas si queremos evitar otra y más veces los males que en el día nos afligen y de que aun no estamos libres. **Una nación no puede prosperar sin un buen gobierno, y no puede tener este buen gobierno sin una Constitución o (lo que es lo mismo) sin unas leyes fundamentales que ella misma establezca y vele por su observancia.**

No creáis que los Reyes vienen enviados de Dios a los pueblos, como os predicán los que quieren ser Reyes, y Reyes árbitros de vuestras vidas y vuestras haciendas. **La voluntad de los pueblos es la que hace los Reyes; y ella misma los deshace cuando éstos abusan de los poderes que el pueblo les ha confiado.** Un Rey es un General, un Administrador nombrado por la nación para que vele sobre su defensa exterior, mantenga la tranquilidad interior y promueva la riqueza y prosperidad de la nación y todos sus habitantes.

»[...] Españoles: no más juego, no más indolencia sobre nuestros más preciosos derechos. Repelamos a los Vándalos franceses más allá de los Pirineos, pero desde ahora **establezcamos un Gobierno firme y liberal** que afiance en el Trono de España a Fernando y sus sucesores y asegure para siempre la libertad y demás derechos de la nación.

Una monarquía hereditaria en cabeza de Fernando y sus descendientes es la forma de Gobierno que debemos adoptar; pero bajo una Constitución que modere

y fije los límites de la Autoridad real y arregle las relaciones que debe haber entre la Nación y el Rey. Nuestras antiguas Cortes, mejor organizadas, serían el antemural, como en otro tiempo lo fueron del poder absoluto y arbitrario del Rey y sus Ministros. En ellas manifestará la Nación al Rey las necesidades del Estado y acordará con él lo que convenga al bien de entrambos. Un Consejo de Estado, compuesto de españoles honrados, patriotas y sabios ilustrará y fijará la voluntad del Rey y le libertará de la perfidia y las asechanzas de sus Ministros. Y un senado o Cámara Alta nacional velará sobre la observancia de la Constitución... Y en fin, el orden judicial o la Administración de Justicia estará encargada a Tribunales consagrados a este sólo objeto, sin intervención ninguna en lo gubernativo, político o económico de la Nación²⁰».

Casi al mismo tiempo, bastante más al sur, en Cádiz, se difundía la reimpresión de una proclama o «carta», supuestamente fechada el día 6 del mes de agosto y firmada por el «Numida Aben-Humeya», en la que se hacía un llamamiento a la unificación de los poderes provinciales y locales de las Juntas, a la formación de un poder único y fuerte, a la convocatoria de Cortes y la redacción de una Constitución:

«Representantes ilustres que formáis en las varias provincias del continente español las Juntas Supremas

que velan en los objetos de la defensa y de la seguridad pública, congregaos en Madrid y estableced allí un Gobierno central y uniforme que anuncie la iniciativa para juntar unas Cortes o Estados Generales, establecer de consuno una Constitución política, pero con pausa y madurez, que sea la égida de la libertad civil y política de nuestra Patria, de si independencia e integridad [...]»²¹.

Efectivamente, a partir del 25 de septiembre de 1808 los poderes locales y provinciales confluyeron en un poder unificado con la formación de la Junta Central²². Conviene recordar que, comenzada la revuelta contra el ejército napoleónico y la formación de las Juntas en distintos lugares de España a finales de mayo de 1808, pronto se formó opinión sobre la conveniencia de que las Juntas se reunieran formando un poder fuerte y unificado, tanto para la dirección de la guerra, como para la gobernación del país²³. Ya el Manifiesto de la Junta de Murcia de 22 de junio de 1808 planteaba la elección de sendos Consejos, civil y militar, para la gobernación de la monarquía ante la ausencia de Fernando. En la misma línea, mientras que las Juntas de Galicia, León, y Asturias, votaron por una Junta Central con dos representantes de las «supremas», la de Sevilla lo consideró oportuno, pero para nombrar un Regente o convocar Cortes, y por su parte la Junta de

Valencia, el 16 de julio, en un interesante manifiesto, tras recordar que «toda la Nación está sobre las armas para defender los derechos de su Soberano», y que «tantas provincias diversas en genio, en carácter y aún en intereses» habían adoptado medidas similares «estableciendo una misma forma de gobierno», advertía que, aun siendo medidas convenientes «para el gobierno particular de cada provincia», no bastaban para la unión de todas por lo que consideraba indispensable,

«para formar una sola nación, una autoridad suprema que en nombre del Soberano reúna la dirección de todos los ramos de la administración pública. En una palabra, **es preciso juntar las Cortes o formar un cuerpo supremo**, compuesto de los diputados de las provincias, en quien resida la regencia del Reino, la autoridad suprema gubernativa y la representación nacional».

Insistía la Junta de Valencia en la necesidad de que hubiera una dirección única para las operaciones militares y de «todos los demás ramos de la administración pública», destacando que la formación de una autoridad suprema era esencial para «la conservación de nuestras Américas y demás posesiones ultramarinas», ya que, de no constituirse una autoridad unificada, ante la diversidad de Juntas provinciales,

«¿A qué autoridad obedecerían? ¿Cuál de las provincias dirigiría a aquellos países las órdenes y las disposiciones necesarias para su gobierno, para el nombramiento y dirección de sus empleados y demás puntos indispensables para mantener su dependencia? No dependiendo, desde luego, directamente de autoridad alguna, **cada colonia establecerá su gobierno independiente, como se ha hecho en España**, su distancia, su situación, sus riquezas y la natural inclinación a la independencia las podrían conducir a ella, roto por decirlo así, el nudo que las unía con la Madre Patria, y nuestros enemigos conseguirían, sin más medios que el de nuestro descuido, lo que no hubieran podido lograr con todos los esfuerzos de su poder».

Por otra parte, y merece destacarlo, los miembros de la Junta valenciana, conscientes de las dificultades de lograr una unificación de mando por los intereses particulares de las Juntas provinciales, abogaban por una renuncia voluntaria de «alguna fracción de la soberanía» de las provinciales para lograr un gobierno único fortalecido:

«La Junta Central entenderá en todos los puntos a que no puede extenderse la autoridad e influencia de cada Junta Suprema aislada, y **en aquellos de que el interés general exige se desprenda cada una, para ganar**

en la totalidad lo que a primera vista parece que pierden en renunciar alguna fracción de la soberanía, que siempre será precaria si no se consolida y concierta. Por lo mismo, cree indispensable que la Junta Central, compuesta de los diputados de cada una de las supremas comitentes, entienda y decida a nombre de nuestro Soberano Fernando VII, en todo lo que se llama alto gobierno [...]

El acuerdo mayoritario en esta corriente de opinión, que insistía en la formación de la Junta como poder central, condujo, tras el rechazo a la propuesta del Consejo de Castilla de reunir a representantes de las ciudades de voto en Cortes y constituir Regencia, a la doble reunión en los palacios de Príncipe Pío, en Madrid, y Aranjuez, de diversas Juntas por separado, para terminar el 22 de septiembre en una reunión conjunta en Aranjuez, en la que, tras rechazar a las Juntas que no fueran «provincias»²⁴ por considerarlas de menor importancia, se constituyó el 25 de septiembre de 1808 la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, decidiendo que su lugar de residencia sería el Real Sitio de Aranjuez, y siendo elegido su Presidente el conde de Floridablanca. Tras rechazar de nuevo las reticencias y el informe del Consejo de Castilla del 8 de octubre, que negaba la legalidad de la Junta Central y se mostraba claramente partidario de

constituir una Regencia por ser más acorde a la tradición y a la legislación española, la Junta comenzó a gobernar el país y a dirigir la guerra, organizando los ejércitos puestos bajo su mando e iniciando la búsqueda de recursos regularizados, para lo que estableció tributos de guerra.

La llegada de Napoleón a España, en noviembre de 1808, y la toma de Madrid por el ejército francés, obligó al traslado de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino a Sevilla, donde se instaló el 16 de diciembre de 1808. Ya en Sevilla cerró y firmó el tratado de alianza con Inglaterra, y planteó una ampliación de la propia Junta con una convocatoria, el 22 de enero de 1809, para que se integraran en ella representantes de los «españoles americanos», elección en los reinos de Indias, en cuanto «parte esencial e integrante de la monarquía española» para tener «representación nacional» por medio de sus diputados en dicha Junta o gobierno. En su convocatoria, la Junta decía que esos «vastos y preciosos dominios» no eran colonias o factorías «como los de las otras naciones». Como indicó Sajid Alfredo Herrera²⁵, convencidos o no de esa declaración, los miembros de la Junta querían a toda costa capitalizar la adhesión americana. Y es que, en plena guerra contra el francés, el gobierno español trató por todos los medios de asegurar la fidelidad de los americanos hacia Fernando VII, o lo

que era lo mismo, el apoyo al levantamiento contra el ejército napoleónico.

Juntas en América: soberanía y lealtad al Rey

En América las noticias sobre las renunciaciones de Bayona, y la formación de Juntas en la península, tuvieron eco y se produjeron manifestaciones de adhesión que, pese a que se fueron conociendo con bastante retraso, se recibieron con optimismo. Sin embargo, y como es conocido, las circunstancias no eran tan maravillosas como todas esas manifestaciones y noticias podrían hacer pensar. Por una parte hay que señalar que casi todas esas manifestaciones de adhesión las hacían representantes de la monarquía española en América. Por otra, que el movimiento insurreccional corría paralelo a dichas manifestaciones. Y por último hay que destacar que los representantes americanos en Bayona habían formulado una serie de peticiones —entre ellas la igualdad entre americanos y españoles, libertad de producción y comercio, separación de las funciones administrativas y judiciales, supresión de monopolios y privilegios— que coincidían en muchos casos con las quejas de los criollos de fines del siglo XVIII, y que fueron vistas con recelos en España por la Junta Central y otros poderes públicos.

Y es que si casi nunca faltaron demostraciones a favor de Fernando VII, como ocurrió en la península, tampoco faltaron declaraciones de la asunción de la soberanía por antiguos o nuevos poderes constituidos, manifestaciones y propuestas políticas que provocaron recelos entre los españoles europeos y las autoridades peninsulares recién establecidas.

Significativo parece lo que aconteció en ciudad de México al conocerse las renunciias de Bayona y la proclamación como rey de José I. En medio del desconcierto provocado por las noticias entre las autoridades del virreinato, el 19 de julio de 1808 el ayuntamiento de México puso en manos del Virrey José Iturrigaray una representación en la que, tras jurar fidelidad a Fernando VII y no reconocer a Napoleón ni a ningún otro miembro de su familia, afirmaba que, por la prisión del rey, el derecho de soberanía, que se representaba en todo el reino, había recaído de nuevo en el pueblo a quien representaba el propio ayuntamiento y que, por tanto, la ciudad de México, en representación del reino, se erigía en sostén de los derechos de la casa reinante y pedía al Virrey que continuase provisionalmente encargado del gobierno y la defensa del virreinato. Iturrigaray, confuso, realizó diversas consultas, entre otras a la Audiencia, resolviendo finalmente oponerse a las pretensiones del ayuntamiento y que continuasen el gobierno y la jerarquía como

hasta ese momento, siendo él mismo el representante de la corona. Los acontecimientos posteriores, que condujeron a la formación de juntas, respaldaron en buena medida las pretensiones del ayuntamiento de México, de las que algunos peninsulares residentes en la ciudad ya habían sospechado intenciones independentistas²⁶.

En Caracas, cuando se conocieron las abdicaciones de Bayona, se planteó la discusión sobre la soberanía. El 17 de julio se debatió el asunto, tras convocatoria del capitán general a las corporaciones y autoridades civiles, y se acordó ratificar a Fernando VII y no cambiar el gobierno provincial. Diez días más tarde, y a petición del capitán general se le remitió un proyecto de formación de Junta que no prosperó, pues se acordó reconocer a la Junta de Sevilla, de la que un representante había llegado la noche antes. No obstante, el cabildo mostró sus reservas argumentando que la Junta sevillana no podía adjudicarse la autoridad soberana. En noviembre se reabrió el debate, en esta ocasión argumentando que, ausente el rey, «la soberanía regresaba a la nación»²⁷. Se envió una representación al capitán general solicitando la formación de una Junta Gubernativa, y aunque la propuesta fue rechazada —y sus promotores juzgados y condenados, aunque meses después fueron absueltos—, es evidente que la semilla quedó sembrada.

Bastante lejos de allí, en Montevideo, a fines de septiembre de 1808, el cura párroco de la ciudad, Juan José Ortiz, envió un oficio al Obispo de Buenos Aires, que le impedía celebrar misa por haber formado parte de la Junta presidida por Elío, Junta que en Buenos Aires era considerada rebelde. El párroco justificaba su adhesión a la creación de la Junta alegando que los americanos tenían el mismo derecho a hacerlo que los europeos, argumentando también sobre el interés de Napoleón por las posesiones americanas de la monarquía hispánica:

«Ilustrísimo Señor: Los españoles americanos somos hermanos de la los españoles de Europa; por que somos hijos de una misma Madre, formamos un mismo pueblo, componemos una sola familia: estamos sujetos a un mismo Monarca: gobernamos por las mismas Leyes, y nuestros derechos son unos mismos. Los de allá, viéndose privados de nuestro mas amado Rey el Señor D. Fernando Séptimo han tenido facultades para proveer a su Seguridad común; y defender los imprescriptibles derechos de la corona, creando Junta de Gobierno que han sido la salvación de la Patria, y creándolas con aun mismo tiempo, y como por inspiración Divina. Lo mismo sin duda podemos hacer nosotros pues somos igualmente libres, y nos hallamos envueltos en unos mismos peligros; por que aunque estamos más distantes, esta rica

colonia fue ciertamente el sebo que arrastró al infame corso al detestable plan de sus pérfidias, y violentas usurpaciones, [...] Si se tiene a mal que Montevideo haya sido la primera ciudad de la América que manifestase el noble, y enérgico sentimiento de igualarse con las ciudades de su Madre Patria, fuera de lo dicho y de hallarse por su localidad mas expuesta que ninguna de las otras, la obligaron a esas circunstancias que son notorias, y no es un delito ceder a la necesidad»²⁸.

Con la convocatoria de 22 de enero de 1809 para que se integraran en la Junta Central representantes de los americanos, estos pudieron comprobar que no se les trataba en un plano de igualdad con los españoles peninsulares. Como señaló François-Xavier Guerra, la idea de tener una representación americana —como había hecho José Bonaparte cuando invitó a los americanos a participar en Bayona— era una concesión fruto de la necesidad de asegurar su apoyo y ayuda financiera²⁹, de ahí que la menguada representación que se les otorgó —la representación de las Indias estipulada por la Junta instaba a elegir un representante por cada Virreinato (México, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata) y otro por cada Capitanía General (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela), es decir una representación bastante inferior a la peninsular, nueve diputados americanos frente a

36 diputados peninsulares— generó toda suerte de quejas y protestas desde que se conoció la convocatoria³⁰, quejas que no cesaron tras la creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, en junio 1809, en el que se establecieron tres Salas, una de justicia y dos de gobierno, una para los asuntos de España y otra para los de las Indias³¹.

Por otra parte, el desarrollo de los acontecimientos bélicos en el primer trimestre de 1809 provocó que la imagen de la Junta Central fuera deteriorándose y provocando pérdida de confianza en su gestión, lo que contribuyó a que se reforzara la idea de convocar Cortes para que regularan y garantizaran el proceso reformista y elaborar una nueva Constitución. A mediados de abril se retoma con insistencia la necesidad de la convocatoria, y se reiteran las propuestas de realizar una consulta a la opinión pública, dictamen cuya solicitud se anunciaba en el decreto del 22 de mayo³², y que se concreta en la circular de 24 de junio de 1809. Antes, el 10 de mayo de 1809, se publicó el «Manifiesto a los americanos» redactado por Manuel José Quintana en el que se indicaba que en esos momentos había en España un gobierno liberal del que debían ser partícipes los súbditos americanos; y el gobierno preparó un decreto adjunto de 22 de mayo donde se les aseguraba que tendrían iguales derechos que los españoles europeos³³.

Convocatoria de Cortes y consulta al país

La «consulta al país» —que planteaba cuestiones tan básicas como si las Cortes debían seguir el modelo estamental, o reunirse en base a la población de España, o si deberían existir una o dos cámaras—, se convirtió en una consulta a algunos notables y «hombres sabios», confirmando, una vez más, el alejamiento de todo el proceso ideológico del pueblo, aunque se hiciera en beneficio del pueblo, como diría Antonio Capmany:

«Se debe suponer que todas las innovaciones y reformas que se propongan y ventilen en las Cortes habrán de recaer en su mayor parte sobre el clero y nobleza porque, en cualquier de ellas, el pueblo sólo va a ganar y no a perder»³⁴.

La consulta, como se ha dicho, fue respondida por una serie de personalidades reconocidas, y en general son conocidos los informes que se emitieron. Recordemos aquí tan sólo la opinión emitida por el Ayuntamiento de Cádiz y por el abogado gaditano José Manuel de Vadillo.

Los regidores gaditanos nombraron una comisión compuesta por José Serrano Sánchez, regidor perpe-

tuo, José López del Diestro, regidor electivo, Manuel Derqui y Fassara, diputado del común, Joaquín Antonio Gutiérrez de la Huerta, procurador mayor y José Mollá³⁵. En su informe, los comisionados gaditanos realizaban un erudito y profundo estudio de la historia de las Cortes en España, para concluir que la institución había servido siempre como freno a las ambiciones de los monarcas, y defensa de los derechos de los españoles, y tras argumentar ideas como que

«las Cortes no solamente tienen poder para hablar, sino para obrar más de lo que ordinariamente se piensa, y tanto, cuanto la Monarquía necesita para su arreglo»,

pedían el voto en Cortes para la ciudad de Cádiz recurriendo a la teoría del pacto entre los ciudadanos y el rey:

«Para consolidar el Gobierno, **es necesario restablecer los pactos sociales entre el Soberano y los ciudadanos**, conforme a la antigua Constitución de la Monarquía. Este es el voto unánime de la Nación y el objeto lisonjero, como justo, que V.M. le tiene anunciado»³⁶.

Por su parte, José Manuel de Vadillo, que opinaba que la soberanía era básicamente la facultad de pactar, y que la soberanía de la nación se desarrolla mediante

la facultad legislativa, consideraba que resolver el asunto relativo a la conveniencia de convocatoria de Cortes es muy fácil:

«[...] encárguese el establecimiento y custodia de estas leyes a quienes sean interesados en su subsistencia, y como lo es forzosamente la masa general de la Nación, dedúcese de aquí que a toda ella deberá confiarse el cuidado del establecimiento, permanencia, corrección o anulación de dichas leyes, según juzgase más conveniente al bien común; y siendo imposible que la nación entera concorra individual y simultáneamente a este ejercicio de sus derechos, por eso es indispensable la legítima representación nacional»³⁷.

Pero, quizás, la aportación más interesante de Vardillo la realiza cuando habla de la representación en las Cortes de los americanos. Tras recordar que las colonias fundadas por los griegos formaban un único sistema de federación, expone que ya ha pasado la época de «la tiranía feroz», y considera que ya ha llegado el momento de procurar «el bien universal», por eso,

«[...] nuestros hermanos e hijos que habitan aquel vasto y hermoso continente merecen, [...], todos los respetos de nuestra gratitud, aun cuando asimismo no lo exigiera por otro lado la justicia. Presida, pues, ésta ya

a todas nuestras relaciones para estrechar más y más nuestros tiernos e indisolubles lazos, y convénzanse ellos mismos de la sinceridad de nuestros deseos. **Vengan a tomar parte activa y a consolidar la grande obra de nuestra común felicidad, y sentados en el Congreso augusto de la Nación**, sepan la conducta de los Ministros responsables a ella de sus operaciones, y discutan y acuerden y resuelvan los grandes intereses del estado por los medios que legitimará su presencia y sancionará su voto»³⁸.

No obstante, conviene recordar que José Manuel de Vadillo planteaba que, en consideración al número de contribuyentes, las distancias y las dificultades y gastos de los viajes, una representación de cincuenta diputados de ultramar era suficientemente significativa³⁹, adelantándose y aproximándose a lo que fue, efectivamente, la representación numérica de los americanos en las Cortes de Cádiz.

Las respuestas a la consulta nacional fueron llegando a la Junta Central a finales del verano, y se empezó a trabajar con ellas en el mes de octubre. Pero nuevamente los avatares de la guerra aceleraron los pasos.

Tras la derrota de Ocaña (19 de noviembre de 1809), la Junta Central quedó nuevamente en entredicho y sin un amplio consenso en su autoridad. Por

otra parte el avance francés obligó a los miembros de la Junta a abandonar Sevilla para retirarse hacia la Isla de León, donde creían que estarían más resguardados. Pero su falta de respaldo popular y de control del orden aconsejaba su renuncia, lo que hizo la Junta Central en favor de un Consejo de Regencia, en el famoso Decreto de 29 de enero de 1810.

El mismo día se publicó un manifiesto dirigido a los *Españoles*, que comienza recordando que la «Junta Central Suprema Gubernativa del Reyno, siguiendo la voluntad expresa de nuestro deseado Monarca y el voto público, había convocado a la Nación a sus Cortes generales», para exponer el discurrir de los acontecimientos desde la entrada de los franceses en La Mancha y los tristes sucesos que siguieron. Los firmantes protestan de las dificultades que habían encontrado en su gobernación, y de los ataques que habían recibido por su gestión, defendiéndose de las agresiones sufridas, sobre todo de que la maldad de algunos les imputase los reveses de la guerra:

«Así Españoles han sido perseguidos, e infamados aquellos hombres que vosotros elegisteis para que os representasen; aquellos que sin guardias, sin esquadrones (sic), sin suplicios, entregados a la fe pública, ejercían tranquilos a su sombra las augustas funciones que les habíais encargado. [...] Reducidos de aquí en adelante

a la clase de simples Ciudadanos por nuestra propia elección, sin mas premio que la memoria del zelo, y afanes que hemos empleado en servicio público, dispuestos estamos, o mas bien ansiosos de responder delante de la Nación en sus Cortes, o del Tribunal que ella nombre a nuestros injustos calumniadores»⁴⁰.

El manifiesto termina recordando la «convocación de Cortes», con la renuncia al poder, traspasándolo a la Regencia⁴¹.

El Consejo de Regencia, que quedó constituido en los primeros días de febrero de 1810, estuvo formado por Pedro Quevedo y Quintana, obispo de Orense, como Presidente⁴², el capitán general Francisco Javier Castaños, el teniente general de marina Antonio Escaño, Francisco Saavedra, miembro de la primitiva Junta de Sevilla y Miguel de Lardizábal y Uribe en representación de las provincias de ultramar⁴³. Tras unos problemas de reconocimiento y enfrentamientos con la Junta de Cádiz, la Regencia fue aceptada como máximo órgano de gobierno, y al tiempo, y siguiendo el parecer de la extinta Junta Central, confirmó la convocatoria de Cortes.

La Junta de Cádiz de 1810, modelo en América

Como se ha dicho, los inicios de la labor de gobierno de la Regencia no estuvieron exentos de dificultades, principalmente por la oposición que encontraron en Cádiz. La precipitada salida de la Junta Central de Sevilla, camino de la Isla de León en enero de 1810, provocó una situación de desgobierno que llegó a poner en peligro la integridad de algunos de sus miembros, y pese a que la Junta anunció oficialmente su reinstalación tras su llegada a la Isla el 27 de enero, en Cádiz se exigió la formación de una nueva Junta en la ciudad que tuviese facultades soberanas.

La propuesta partió del síndico del Ayuntamiento Tomás de Istúriz quien, en la noche del día 27 de enero de 1810, afirmó que la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino había dejado de existir –pese a que dicha Junta había enviado oficio a Cádiz comunicando su reinstalación–, por lo que planteó la necesidad de formar una nueva Junta Superior Gubernativa de Cádiz que sustituyera a la formada en junio de 1808, y que se encargara de organizar la defensa y gobierno de Cádiz, que por otra parte era ya, junto con la Real Isla de León, prácticamente el único territorio peninsular no controlado por los franceses. Para su formación, propuso que, mediante bando, se pidiera a cada varón cabeza de familia que al día siguiente entregase

una papeleta con los nombres de tres personas para la elección de los compromisarios que deberían formar la nueva Junta. Al día siguiente, el 28 de enero, tras el escrutinio de los votos emitidos por los «jefes de casa», se nombraron 54 electores que votaron a los 18 individuos que formaron la Junta gaditana⁴⁴. El proceso se debería repetir cada cuatro meses, y así ocurrió de nuevo el 28 de mayo.

La creación de la nueva Junta gaditana causó un grave problema de autoridad y credibilidad a la Central, y sin dudas influyó en su renuncia y cesión del poder al Consejo de Regencia el 29 de enero, al día siguiente de constituirse la Junta de Cádiz, y tras haber convocado Cortes.

La nueva situación provocó unos días de incertidumbre y confusión, según testimonio de la propia Junta Gubernativa de Cádiz. Cuando Tomás de Istúriz realizó su propuesta argumentando que la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino había dejado de existir, estaba apuntando a una situación de acefalia parecida a la vivida en 1808 con la salida de la Casa Real de España hacia Bayona y la cesión de la Corona a Bonaparte. La huida de Sevilla de la Junta Central, además de acusaciones de traición, provocó el surgimiento de nuevas Juntas, como ocurrió en la propia Sevilla, donde se formó una nueva Junta que, con la llegada de los franceses, terminó huyendo a Ayamonte⁴⁵, y como

ocurrió en Cádiz con la nueva Junta Superior Gubernativa que se convirtió en la más fuerte, capaz de ignorar la reinstalación de la Central y de rechazar la cesión del poder a la Regencia. Lo que la Junta de Cádiz estaba planteando es que la Junta Central, que había asumido la soberanía en nombre de los españoles, por cesión de estos, al cesar en sus funciones no podía ceder la soberanía a una Regencia, sino que la soberanía debía retornar a los españoles quienes deberían proceder a escoger un nuevo ejecutivo, una nueva Junta Superior Gubernativa, y estando toda España ocupada por el ejército invasor era la gaditana la que debía asumir las facultades soberanas. La Junta de Cádiz se presentaba como un poder surgido de la voluntad popular, como un gobierno representativo, frente a la Regencia que asumía un poder cedido ilegalmente.

Los argumentos de la Junta Gubernativa de Cádiz quedaron claramente expresados en su manifiesto *La Junta superior de Cádiz a la América Española*, fechada el 28 de febrero de 1810, en el que daba cuenta a los «pueblos de América» de los acontecimientos ocurridos desde principios de 1810, y les solicitaba su adhesión a la causa de la «salvación de la patria», colaborando con la propia Junta y con la Regencia a la que ya había reconocido⁴⁶.

Tras admitir implícitamente ese reconocimiento⁴⁷, resumía los acontecimientos ocurridos desde la batalla

de Ocaña, la pérdida de confianza en la Junta Central y la crisis de autoridad y pérdida de prestigio como consecuencia de la huida de Sevilla, para explicar y justificar a continuación el propio origen de la nueva Junta Superior Gubernativa de Cádiz

«disueltos al parecer los lazos políticos que unen los diferentes miembros de la república, cada provincia, cada ciudad, cada villa tenía que tomar partido por sí sola, y atender por sí sola su policía, conservación y defensa. Cádiz desde este instante debió considerarse en una situación particular y distinta de todas las demás ciudades de España. [...] la singularidad y fuerza de su posición debieron persuadirla que en ella iban a constituirse las principales esperanzas del estado. Creyóse con razón el objeto de mayor atención para los patriotas españoles, el lazo más importante de unidad con la América, y el interés y la expectación de toda Europa. **El rumbo que ella siguiese, los sentimientos que manifestase debían ser principios de conducta y sendero de confianza para otros pueblos.**

»[...] Mas **para que el gobierno de Cádiz tuviese toda la representación legal** y la confianza de los ciudadanos, cuyos destinos más preciosos se le confían, **se procedió a petición del pueblo y protesta de su síndico a formar una Junta de Gobierno** que nombrada solemnemente y legalmente por la totalidad del vecindario, reu-

niese sus votos, representase sus voluntades, y cuidase de sus intereses. Verifícase así y sin convulsión, sin agitación, sin tumulto, con el decoro y concierto que conviene a hombres libres y fuertes, han sido elegidos por todos los vecinos, escogidos de entre todos y destinados al bien de todos, los individuos que componen hoy la Junta Superior de Cádiz: **Junta cuya formación deberá servir de modelo en adelante a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de su confianza».**

Continuaba el texto haciendo una lectura positiva del traslado de la soberanía desde la Junta Central a un Consejo de Regencia, indicando, incluso, que le parecía la Regencia «un gobierno más consiguiente a nuestras leyes», que la elección de Lardizábal reforzaba los lazos con América, que ya estaban igualados en derechos los españoles de América y la península, que se habían convocado Cortes con representación americana, e insistía, finalmente, en la necesidad de seguir unidos los españoles de la península y los de América.

El manifiesto de la Junta de Cádiz tuvo influencia en América, pero no en la amplitud y en la intención última que contenía.

Visto desde América —también para muchos peninsulares— la entrada de los franceses en Andalucía en 1810 hizo que pareciera inminente el control ab-

soluta de España por Bonaparte, imagen a lo que contribuyó la disolución de la Junta Central en Cádiz y la creación del Consejo de Regencia del que incluso se pensó que quedaba encargado de negociar la rendición.

La sensación de inseguridad y de vacío de poder provocó una nueva oleada de formación de Juntas en muchas ciudades entre abril y septiembre de ese mismo año, entra las que destacaron Caracas, Cartagena, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Quito o Santiago de Chile⁴⁸. Y hay constancia de que entre los argumentos utilizados para reivindicar su soberanía y la formación de un gobierno representativo, se mencionó el manifiesto de la Junta de Cádiz. Así ocurrió, por ejemplo, en Buenos Aires donde la Junta dispuso la publicación del manifiesto gaditano, y aludió, tal como hizo la Junta de Cádiz, a la doctrina de la asunción de la soberanía por considerar ilegal la cesión del poder a la Regencia, en el comunicado del 28 de mayo de 1810 en el que daba noticia de su instalación al virrey del Perú, entre otras personalidades e instituciones. También en Cartagena de Indias donde llegaron con el manifiesto, procedentes de Caracas, Montúfar y Villavicencio en ese mismo mes de mayo. Como ocurrió en el Cabildo abierto de Santiago de Chile del 18 de septiembre en el que se hizo constar cómo el manifiesto gaditano debía servir de modelo a quienes

quisiesen formar un gobierno representativo⁴⁹. En definitiva, hubo Juntas de América que en 1810 no reconocieron al Consejo de Regencia siguiendo el precedente de Cádiz y su invocación a la reconstitución de la soberanía ante una cesión que se consideró ilegal.

La Constitución de 1812 y su repercusión en América y Europa

Reunidas las Cortes en la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810, aprobaron el primer decreto proclamando solemnemente el principio de la soberanía nacional que residía en las Cortes, y en el mismo decreto se insistió en ello al atribuir el poder ejecutivo a la Regencia, que para que no hubiera dudas sobre quienes representaban la soberanía de la nación deberían prestar juramento ante las Cortes con la fórmula publicada en el mismo decreto: «¿**Reconocéis la soberanía de la nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias?** ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y constitución que se establezca según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar?»⁵⁰

La idea quedó ratificada en el artículo tercero del texto constitucional: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Esta declaración, que fue debatida intensamente en las Cortes⁵¹, se convertiría en emblema y ejemplo en muchos territorios de Europa y América incluso tras la anulación de la Constitución de 1812.

Como es ampliamente conocido, la Constitución gaditana tuvo apenas seis años de vigencia en España, y en tres breves etapas, y pese a ello su texto sirvió de modelo para el desarrollo constitucional de muchos países iberoamericanos y europeos, contribuyendo a forjar caminos de libertad.

La Constitución de Cádiz fue emanación de la soberanía nacional, expresada por los diputados de las Cortes que habían sido electos mediante sufragio, de manera que fue decretada por «las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española», o lo que es lo mismo por los representantes legítimos de la Nación.

El principal valor que se reconoció en la Constitución de 1812, y por ello se convirtió en modelo, es la concepción de la propia Constitución como ley suprema producto de la soberanía popular, y en tanto que emanación de la soberanía, la Constitución como norma superior que organiza el estado-nación⁵², que limita el poder, y contiene una declaración de los valores fundamentales, los derechos y garantías de la sociedad y los ciudadanos. Y ese fue el ejemplo que

Cádiz ofreció a Europa y América.

En general, se ha repetido, que el ejemplo constitucional gaditano saltó el Atlántico y fue seguido en América, principalmente en las antiguas colonias del imperio español, que en el proceso emancipador y de su propia consolidación como naciones libres siguieron el texto de la Constitución española de 1812. No obstante, no conviene olvidar que la Constitución de Cádiz estuvo vigente en casi toda la América española, aunque el período cronológico varía en función del más pronto o tardío comienzo y éxito del proceso de independencia en los diferentes territorios americanos.

Siguiendo el mandato de las Cortes, la Constitución proclamada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 comenzó a editarse y jurarse en los territorios americanos a partir de los meses de septiembre y octubre de ese mismo año. Aunque su vigencia fue corta, algunos efectos se notaron en la aplicación de la Constitución, que, entre otras cosas, y para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos, suponía un importante recorte del poder absoluto ejercido por los representantes de la monarquía en América, tanto en los casos de los virreyes, como de las audiencias, pero sobre todo donde más se dejó notar es en el establecimiento de ayuntamientos para el gobierno de las poblaciones que llegaran, «por sí o en su comarca», a las mil almas; igualmente la creación de las diputaciones

provinciales que colaborarían con el jefe político en la administración de las provincias⁵³. Como apuntó Antonio Annino para el caso mexicano, la aplicación de esta medida contemplada en la Constitución de 1812 provocó una gran transferencia de poder del Estado a las comunidades locales, contribuyendo a la desintegración del espacio político virreinal⁵⁴.

Por esta y otras razones, la aplicación de la Constitución provocó malestar entre los partidarios de no modificar el estatus social y político en las colonias, mientras que en los sectores criollos descontentos entendieron que el código gaditano no les proporcionaría la independencia.

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución las Cortes Generales y extraordinarias publicaron, mediante el Decreto 162, de 23 de mayo de 1812, la «Convocatoria para Cortes ordinarias de 1º de octubre de 1813». El Decreto iba acompañado de sendas instrucciones sobre cómo celebrar las elecciones en la «península e islas adyacentes» y «en las provincias de Ultramar»: mientras que en el primer caso se ordenaba formar una «junta preparatoria» en cada provincia, y se especificaba, en una tabla, el número de diputados por provincia y por cada 70.000 habitantes con arreglo al censo de 1797, en el segundo caso se ordenó que se formaran juntas preparatorias «en las capitales siguientes: México, capital de Nueva España; Guada-

lajara, capital de Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; Guatemala, capital de la provincia de este nombre; Monterrey, capital de la provincia del Nuevo Reino de León, una de las cuatro internas del Oriente; Durango, capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias internas del Occidente; Habana capital de la isla de Cuba y de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada; Caracas, capital de Venezuela; Lima, capital del Perú; Santiago, capital de Chile; Buenos Aires, capital de las provincias del Río de la Plata, y Manila, capital de las islas Filipinas», y aunque también se aplicaba la proporción de un diputado por cada 70.000 habitantes, en este caso no se establecía el número pues se indicaba que se usaran «los censos de población más auténticos entre los últimamente formados». Sea como fuere, en las Cortes ordinarias de 1813 hubo representantes americanos, durante poco tiempo pues en mayo de 1814 Fernando VII restauró por la fuerza el gobierno absoluto.

Desde 1814 a 1820 las provincias de Ultramar, como la España peninsular, volvieron a ser gobernadas como si la Constitución de Cádiz jamás hubiera sido promulgada. Se volvió al gobierno absoluto simple y llanamente. En el mes de marzo tuvo lugar, como sabemos, el pronunciamiento de Riego y la publicación y juramento de la Constitución de Cádiz, y en el mes

de abril el rey dirigió a todos los habitantes de Ultramar un manifiesto en el que les participaba el restablecimiento del régimen constitucional.

Entre los meses de mayo y junio se publicó y se prestó juramento a la Constitución por parte de las supremas autoridades de los diferentes virreinos. Unas nuevas Cortes reunidas el 9 de julio, contaron nuevamente con representantes americanos, aunque menguada por los procesos de independencia ya concluidos. Pero nuevamente en 1823 volvía la restauración absoluta y los dos hemisferios de la monarquía fernandina dejaron en suspenso las soluciones liberales de gobierno.

Por eso no es gratuito afirmar que la emancipación de los territorios españoles en América se vio favorecida por la coyuntura bélica y política que vivió España entre 1808 y 1814 y por los procesos posteriores de anulación, restauración y nueva anulación de la Constitución de 1812. La intromisión de Napoleón en los asuntos españoles y la supresión de hecho de la dinastía de Borbón, origen a la guerra de la Independencia española, provocaron, como en España, la aparición de Juntas de gobierno en las principales ciudades americanas. Juntas que, si en principio reconocieron la autoridad real de Fernando VII, también propiciaron el comienzo del proceso emancipador, aunque la convocatoria y reunión de las Cortes de Cádiz, primero, y la proclamación de la Constitución de 1812, inclinaron

a cierta moderación a los movimientos independentistas al confiar en que el nuevo escenario político español propiciaría también una nueva organización política, social y económica de los territorios americanos.

Sin embargo, el retorno al trono de Fernando VII y la vuelta al absolutismo en 1814, provocó la reanudación de las confrontaciones y la guerra abierta. En 1820 el pronunciamiento de Riego en Las Cabezas de San Juan, facilitó a los patriotas americanos la realización de las últimas campañas militares, que les llevarían al triunfo final y a la independencia.

Las luchas por la emancipación no impidieron que el modelo político que se estaba elaborando en las Cortes de Cádiz, que tuvo como paradigma la Constitución de 1812, fuera el principal referente ideológico y político de las nuevas naciones americanas. Tras conocerse la restauración del absolutismo en España, después del regreso de Fernando VII en 1814, los independentistas de Nueva España proclamaron el 20 de octubre de ese mismo año la Constitución de Apatzingán, que copiaba muchos aspectos de la gaditana, aunque adaptándolos a las circunstancias del país americano, lo que confirma el carácter de referente que la Constitución de 1812 cobró desde los primeros momentos, convirtiéndose en recurso de interinidad en muchos lugares⁵⁵, mientras se redactaba

la propia constitución⁵⁶. En esta línea, Mario Rodríguez ha analizado la influencia de «Cádiz» en el proceso libertador de Centroamérica, concluyendo como la actividad de los diputados de la circunscripción centroamericana en la Cortes de Cádiz, les sirvió para posteriormente luchar y elaborar sus propios códigos liberalizadores, ya que «el liberalismo español que se forjó en Cádiz, aportó líneas ideológicas clave [sic] para un programa de modernización y de existencia independiente»⁵⁷. Y, por poner otros ejemplos concretos, cabe recordar que la Constitución gaditana tuvo influencia, a través de la portuguesa de 1822 en la brasileña de 1824, y en el desarrollo general del constitucionalismo brasileño⁵⁸, directa, e indirecta a través de la portuguesa de 1822 y la brasileña de 1824, en la uruguaya de 1830⁵⁹, en las de Argentina de 1819 y 1826, en la boliviana de 1826, en las peruanas del primer tercio del siglo XIX...

Por tanto, la Constitución de 1812 fue un modelo de gran influjo en el devenir político de las antiguas colonias españolas en América. La idea de nación y las referencias a la tradición española del constitucionalismo que «Cádiz» defiende, tendrán sus paralelos en los textos constitucionalistas americanos, en los que la asunción de la soberanía nacional reforzó la imagen del pasado mítico representado por el gobierno indígena y por la independencia, es decir, la situación pre-

via a la conquista española, de manera que, como proponía la propia Constitución de Cádiz, se remite a una antigua constitución histórica, aunque distinta, y a la tradición.

En cuanto a Europa, a partir de su proclamación el 19 de marzo la Constitución fue tácitamente aceptada en los Estados que luchaban contra Napoleón, aunque no hubiera, que sepamos, un reconocimiento explícito. Sin embargo sí fue reconocida oficialmente en Rusia y en Prusia, y ello pese a levantar ciertos recelos por su carácter democrático y limitador del poder de los monarcas.

Efectivamente Rusia fue el primer país que oficialmente reconoció la obra de las Cortes y su Constitución. En la ciudad rusa de Velikie Luki el 20 de julio de 1812 se firmó un «Tratado de Amistad, Unión y Alianza» entre Rusia y España⁶⁰. Por el tratado, firmado por parte española por el embajador Francisco Zea Bermúdez⁶¹ y por parte rusa por Nicolás de Romanzoff, canciller del imperio, Rusia reconocía la Constitución de Cádiz. El tratado, que establecía que las dos partes se ayudarían en la defensa de sus intereses recíprocos y harían la guerra al emperador de los franceses, comprometía a ambas monarquías a colaborar y a restablecer y aumentar las relaciones comerciales, y en su artículo tercero decía:

«S. M. el emperador de todas las Rusias reconoce por legítimas las cortes generales y extraordinarias reunidas actualmente en Cadiz, como tambien la constitucion que estas han decretado y sancionado»⁶².

Aunque el tratado de Velikie Luki fue consecuencia de la declaración de guerra entre Rusia y Francia, lo que propició el acuerdo con España y la hipotética alianza militar entre las dos naciones contra Napoleón, proporcionó a España el primer reconocimiento internacional de su revolución. Dos años más tarde, en 1814, Prusia reconocería también la Constitución⁶³, aunque este reconocimiento tendría poco efecto cuando, terminada la Guerra de la Independencia española, retornó al trono español Fernando VII, el 4 de mayo de 1814, y anuló la obra de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Al año siguiente se produce la derrota definitiva de Napoleón, el final del proceso revolucionario en Europa y el inicio del proceso de restauración del poder absoluto.

Como consecuencia de todo ello se inicia en Europa un debate político en el que predomina la presencia de partidarios de los modelos moderados de transformación política, más fáciles de asumir por una clase política traumatizada por un cuarto de siglo de convulsiones revolucionarias y guerras en Europa. Por otra parte, se constatan las dificultades para la defensa

pública de los modelos revolucionarios en un contexto generalizado de rigor y persecución, que obliga al recurso a la clandestinidad. Sin embargo, en este ambiente, la Constitución gaditana de 1812 se refuerza como referente, y se difunde por Europa mediante la circulación de numerosas traducciones⁶⁴. La Constitución de 1812 se convierte en la apuesta esencial del radicalismo liberal europeo, tanto por su significado político —la Constitución como norma emanada de la soberanía nacional—, como por convertirse en símbolo de la libertad y la regeneración, hasta el extremo que se puede hablar de una verdadera mitificación de la Constitución de Cádiz.

Cuando a comienzos de 1820 Rafael del Riego encabeza una insurrección militar que restablece en España la Constitución, el modelo gaditano se refuerza ante los revolucionarios europeos, que lo contemplan como ejemplo. El pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812 permitía un cambio político completo, mediante un proceso revolucionario controlado por las elites liberales con apoyo del ejército. Animados por el éxito de la revolución española de 1820, que mostraba también la debilidad del absolutismo restaurado, los liberales europeos la convirtieron en su modelo político y en la bandera de la revolución liberal, y prácticamente todos los movimientos iniciados en Europa la tomaron como objetivo⁶⁵. El modelo

español se mitifica por el propio contexto de la promulgación de la Constitución, una Guerra de Independencia entendida como resistencia heroica ante Napoleón, al igual que se contempla que 1820 fue símbolo del primer desafío a las potencias de la Restauración. 1808, 1812 y 1820, con la lucha de los españoles por su independencia frente a la dominación exterior, así como su deseo de dotarse de un sistema representativo de gobierno, propician la idealización del modelo español de acción revolucionaria.

La clave de tal influencia está en que en España se elaboró una estrategia de recuperación del poder arrebatado por los absolutistas, consistente en que, a partir del pronunciamiento como dispositivo, se ponía en marcha un proceso insurreccional destinado a reinstalar la Constitución de 1812. Esto fue el pronunciamiento de Riego y su triunfo sobre Fernando VII en 1820.

Este modelo de revolución liberal que predominó en Europa al menos hasta 1830, se fundamentaba, en lo político, en la Constitución como objetivo y símbolo de la asunción de la soberanía, y en lo organizativo, en la conspiración secreta y en el pronunciamiento insurreccional basado en el ejército.

De esta manera, cuando en una época sometida a rápidas transformaciones económicas y sociales, los regímenes absolutistas trataron de frenar un proceso que era irreversible, se consolidaron grupos de oposi-

ción que, por una parte habían rechazado el régimen napoleónico en nombre de los ideales de libertad, y por otra se fijaron en la Constitución de 1812 como modelo, lo que explica las traducciones del texto gaditano que se hicieron en esos años.

Frente al poder absoluto, proclamar una Constitución y la soberanía de la nación permitía a la nueva burguesía el acceso al control del estado y transformar las antiguas monarquías en monarquías constitucionales evitando los radicalismos de la revolución francesa. Y este es el modelo que representaba la Constitución de 1812, que colmaba así las aspiraciones de la burguesía europea. Como ya reconociera el propio Carlos Marx, la Constitución gaditana, que respondía a las necesidades de la sociedad española, fue ejemplar para la Europa de la época porque en ella se dio con la solución jurídico-constitucional más apropiada para problemas comunes como la propiedad de la tierra, abolición del feudalismo, la adaptación al desarrollo del capitalismo, etcétera.

Por eso cuando se extendió por Europa la idea de que el pronunciamiento de Riego era una insurrección política para lograr el restablecimiento de la Constitución de 1812, la repercusión revolucionaria del modelo español fue inmediata.

Un modelo que se aplica en Portugal, cuando en agosto de 1820 un pronunciamiento militar en Opor-

to conduce a la formación de la Junta Provisional de Gobierno y a la Convocatoria de Cortes Generales Extraordinarias y Constituyentes. Reunidas en enero de 1821, la Constitución, que sigue el modelo de Cádiz⁶⁶, fue aprobada el 23 de Septiembre de 1822.

En Italia⁶⁷ se aplicó el modelo en Nápoles y Sicilia, donde el trabajo propagandístico de la Carbonería culmina con el pronunciamiento de Nola de 2 de julio de 1820⁶⁸. La proclamación de la Constitución de Cádiz en Avellino y la cesión del gobierno por parte del rey, conducen a la promulgación de la misma por parte del Vicario General y al nombramiento de una Junta provisional de gobierno. Convocadas elecciones en Septiembre, según el modelo gaditano, las Cortes aprobaron una nueva Constitución el 29 de enero de 1821, adaptando la de Cádiz con escasas modificaciones. Sin embargo, la reacción absolutista, liderada por el propio Fernando I, consigue apoyo exterior y el 21 de marzo de 1821 entran las tropas austriacas en Nápoles restaurando el absolutismo e imponiendo una dura represión.

Lo mismo ocurrió en Piamonte⁶⁹. Las conspiraciones liberales, reforzadas tras el éxito napolitano, fructifican en el pronunciamiento de marzo de 1821 y conducen a una breve experiencia liberal «a la española» que dura poco tiempo: la Constitución de Cádiz se impone en Cerdeña casi sin modificaciones, go-

bierna una Junta Provisional de Gobierno..., pero la rápida reacción de la Europa legitimista, con la intervención del ejército austriaco, restaurará, en medio de la represión, el absolutismo.

Ante los movimientos iniciados en 1820, la Europa de la Restauración reaccionó para evitar la reapertura del ciclo revolucionario cerrado en 1815. La drástica intervención de la Santa Alianza debía cortar cualquier brote revolucionario, y si en Italia intervinieron los ejércitos austriacos, en España serán los «Cien mil hijos de San Luis» los que repongan a Fernando VII en su poder absoluto en 1823.

Sin embargo, un ejemplo más podemos recordar del ejemplo gaditano en un movimiento liberal: Rusia. Sin olvidar que durante el mandato de Alejandro I hubo un intento reformista dirigido por Mikhail Speransky, fracasado por la oposición de la influyente corte rusa sobre el zar⁷⁰, conviene destacar que tras la guerra contra Napoleón regresó a Rusia un cuerpo de ejército, oficiales y nobles, que había conocido el movimiento liberal, la prosperidad de naciones sin servidumbre, el poder real limitado..., formándose así un estado de opinión favorable a los cambios⁷¹, y surgen organizaciones secretas con proyectos de monarquía limitada, e incluso se plantea una república liberal. En San Petersburgo el grupo dirigido por Nikita Muraviev tomó la Constitución de Cádiz como modelo y

artículos enteros de la Constitución de 1812 pasaron a su proyecto constitucional para Rusia⁷².

En diciembre de 1825, en la coyuntura problemática por la sucesión de Alejandro, se produce el pronunciamiento militar de los decembristas, que, con la Constitución de Cádiz como estandarte, trataron de imponer la constitución inspirada en el modelo gaditano⁷³. Los decembristas, que aplicaron el arquetipo revolucionario español —y por ello fueron acusados de querer llevar a Rusia el «contagio extranjero»⁷⁴—, planearon la toma del poder político, en nombre de la Constitución, la ley y la libertad. Como es conocido, el movimiento fracasó y sus responsables fueron duramente reprimidos⁷⁵.

* * *

La crisis dinástica de marzo de 1808, seguida de las renunciias de Bayona y la cesión de la corona a Bonaparte, el comienzo de la Guerra de la Independencia y la formación de las Juntas, propició la reconstitución de la soberanía en la nación, un proceso que, desde el primer año del período analizado, se dio también en la América española. La formación de un poder unificado en la Junta Central, la convocatoria de Cortes, la crisis de la propia Junta Central, y su renuncia al poder a favor de la Regencia, reafirmaron los principios sobre

la reversión de la soberanía al pueblo, como demostró el conflicto generado por la Junta de Cádiz de 1810, que se siguió en América. Por fin la Constitución de 1812 consagró el principio de la soberanía residente en la nación, y, anulada la Constitución en 1814, repuesta en 1820, y anulada de nuevo en 1823, todo el proceso constituyente español —engrandecido por la lucha de una nación en armas por su independencia—, se convirtió en modelo destacado para movimientos insurreccionales y que apostaban por la libertad nacional en Europa y América, a lo que hay que añadir la influencia teórica e ideológica en el contexto de los movimientos liberales europeos y americanos. Desde Finlandia a Portugal, desde Estados Unidos al cono sur, el texto gaditano fue objeto de estudio, reflexión y debate en casi todos los círculos intelectuales, ideológicos y políticos, constatándose así su vigencia como emblema de libertad.

Notas

- ¹ Antonio Fernández García: «La cuestión de la soberanía nacional». *Cuadernos de Historia Contemporánea*, vol. 24, 2002, pág. 49.
- ² *El Conciso* no dice que la proposición del primer decreto la hizo Muñoz Torrero, ni menciona a Luján. También *Diario Mercantil de Cádiz*, del día 26 de septiembre de 1810, se hizo eco de la declaración de que la soberanía residía en el Congreso.
- ³ *Fidelísimos españoles*. Decreto de la Junta de Gobierno, dado en Madrid el 8 de mayo de 1808, y suscrito por Bartolomé Muñoz, informando de sucesivos decretos y cartas de Carlos IV, en los que protesta su abdicación, se encomienda a Napoleón y nombra su Lugarteniente al duque de Berg.
- ⁴ *Fidelísimos españoles*.
- ⁵ Claude Martin: *José Napoleón I, «Rey intruso» de España*. Editora Nacional, Madrid, 1969, págs. 111 y ss.
- ⁶ Al respecto, Antonio Moliner: «La peculiaridad de la revolución española de 1808». *Hispania*, nº 166, 1987, págs. 629 a 678.
- ⁷ Manuel Pérez Ledesma: «Las Cortes de Cádiz y la sociedad española». *Ayer*, nº 1, 1991, pág. 171.
- ⁸ *Demostración de la lealtad española; colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados del Ejército y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno o por algunos particulares en estas circunstancias*. Madrid, 1808, t. I, págs. 31 a 33. Todas las negritas de los textos originales son nuestras.
- ⁹ Adolfo de Castro: *Cortes de Cádiz Complementos de las sesio-*

nes verificadas en la Isla de León y en Cádiz. Extractos de discusiones, datos, noticias, documentos y discursos publicados en periódicos y folletos de la época. Madrid, 1913, t. I, págs. 18 y 19. Castro incluyó también la proclama que aparece firmada, en nombre de toda la Junta, por el secretario Bartolomé Canle Gómez.

- ¹⁰ Con toda probabilidad el mismo día 24 de mayo de 1808.
- ¹¹ Sabino Delgado: *Guerra de la Independencia: proclamas, bandos y combatientes.* Editora Nacional, Madrid, 1979, págs. 20 y 21.
- ¹² *Demostración de la lealtad española*, págs. 7 y 8.
- ¹³ *Demostración de la lealtad española*, págs. 15 a 19.
- ¹⁴ En los tomos de *Demostración de la lealtad española* se pueden leer muchos más ejemplos de los que venimos comentando. Pero es que, incluso en las palabras introductorias que escribió el impresor para justificar su iniciativa se manifiesta, implícitamente, la idea de que la soberanía reside en la nación: «He creído pues que haría un servicio a la presente y a las futuras generaciones, reuniendo en un cuerpo todos los papeles que con este motivo se han publicado, porque **considero en ellos la voz pública de la nación.** Aquí es donde aparece **toda la majestad de pueblo español**, su energía y carácter heroico en los magnánimos afectos que expresa y manifiesta, dignos a la verdad de ser coronados con los más gloriosos triunfos».
- ¹⁵ *Diario Mercantil de Cádiz*, 31 de mayo de 1808. Desde ahora DMC, 31-5-1808.
- ¹⁶ Archivo Histórico Municipal de Cádiz: Actas capitulares: cabildo 17, de 31 de mayo de 1808. Desde ahora A.H.M.C., Ac. cap., cab. 17, 31-5-1808.
- ¹⁷ A.H.M.C., Ac. cap., cab. 18, 31-5-1808.

- ¹⁸ Más información sobre este asunto y los acontecimientos ocurridos en Cádiz entre mayo y junio de 1808 en: Alberto Ramos Santana: «La formación de la Junta de Cádiz y el apresamiento de la escuadra de Rosilly. Mayo y junio de 1808». *Trocajero*, nº 20, 2008, págs. 59 a 70.
- ¹⁹ El impreso fue denunciado ante el Consejo de Castilla por Antonio Alonso, cura párroco de San Esteban de Guadala-jara, quien informaba que el papel procedía «sin duda» de Valladolid, y lo denunciaba «por contemplarle perjudicial en sus máximas, contrario al sentir de los Stos. Padres, destructor de la Monarquía, y que induce a la democracia». Archivo Histórico Nacional, CONSEJOS, 11991, EXP. 1.
- ²⁰ *Ibidem*. También en Adolfo de Castro: *Cortes de Cádiz*, págs. 33 a 35.
- ²¹ *Proclama a los españoles y a la Europa entera del africano Numida Aben-Humeya, Raid de la familia de los antiguos abencerrajes y doctor de la ley sobre el verdadero carácter de la Revolución francesa y de su jefe Napoleón, y sobre la conducta que deben guardar todos los Gobiernos en hacer causa común con los españoles para destruir el de una gente enemiga por sistema y necesidad de todas las instituciones sociales*. Obra traducida del árabe vulgar al castellano por D.M.S.G.S., reimpressa por D. Josef Aril, en Cádiz, 1808. En la «Colección del fraile» se localiza un ejemplar de esta proclama editada en Madrid en el mismo año. Ana María Freire López: *Índice bibliográfico de la colección documental del fraile*, Madrid, 1983, pág. 307.
- ²² Manuel Pérez Ledesma ha recordado, siguiendo a Quintana, que la formación de la Junta Central respondía a ciertos principios federativos comunes a una dinámica revolucionaria. Art. cit., pág. 171.

- ²³ Miguel Artola: «Estudio preliminar», en Miguel Artola y Rafael Flaquer Montequi: *La Constitución de 1812*. Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y IUSTEL, Madrid, 2008, págs. 19 y ss.
- ²⁴ Quedaron excluidos los delegados de Álava, Cádiz, Ciudad Real, Cartagena, La Mancha, Santander, Soria y Vizcaya.
- ²⁵ Sajid Alfredo Herrera Mena: *La herencia gaditana. Bases tardío-coloniales de las municipalidades salvadoreñas. 1808-1823*. Tesis doctoral inédita, leída en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2005, pág. 67.
- ²⁶ Véase al respecto Lucas Alamán: *Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente*. Méjico, 1849, t.1, págs. 168 y ss. El texto de la representación en José Guerra: *Historia de la revolución de Nueva España*. Londres, 1813, págs. 2 a 10.
- ²⁷ Inés Quintero: «Lealtad, soberanía y representatividad en Hispanoamérica (1808-1811)». En Manuel Chust (coord.): *Doceañismos, constituciones e independencias*. Fundación MAPFRE, Madrid, 2006, págs. 124 y 125.
- ²⁸ Cfr. *Mayo Documental*, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia Argentina «Doctor Emilio Ravignani», Buenos Aires, 1962, Tomo VI, pág. 305.
- ²⁹ François-Xavier Guerra: *Modernidad e independencias. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas*. México, 2000, págs. 181 y ss.
- ³⁰ Sajid Alfredo Herrera Mena: *Op. cit.*, págs. 67 y ss.
- ³¹ Según el Real Decreto de 25 de junio de 1809 para su constitución, el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias debía ejercer las «funciones que fueron peculiares de todos y cada uno de los antiguos Tribunales suprimidos, y especial-

mente de los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Ordenes», es decir, se le dio las competencias de gobierno y justicia que hasta entonces habían tenido cada uno de los antiguos Consejos. Este nuevo Consejo fue suprimido por decreto de la regencia de 16 de septiembre de 1810, que restablecía además los cuatro Consejos tradicionales, de Castilla, de Indias, de Ordenes y de Hacienda. Sobre el Consejo, puede verse José Sánchez-Arcilla Bernal: «El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias. Notas para su estudio». En: *En la España medieval*, nº 9, 1986, pp. 1.033-1.050.

³² «Para reunir las luces necesarias a tan importantes discusiones, la Junta consultará a los Consejos, Juntas superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, Obispos y Universidades, y oirá a los sabios y personas ilustradas». Decreto de la Junta Central de 22 de Mayo de 1808. Cfr. Adolfo de Castro: *Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones verificadas en la Isla de León y en Cádiz. Extractos de discusiones, datos, noticias, documentos y discursos publicados en periódicos y folletos de la época*. Madrid, 1913, pág. 67.

³³ Juan Marchena Fernández: «La Constitución de Cádiz y el ocaso del sistema colonial español en América». En *Constitución política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Estudios*. Sevilla 2000, vol. I pág. 108.

³⁴ Manuel Morán Orti: «La formación de las Cortes (1808-1810)». *Ayer*, 1, 1991, pág. 31.

³⁵ De José Mollá cuenta Adolfo de Castro que habiendo sido nombrado para la Junta de Bayona en mayo de 1808, excusó su participación por la necesidad de atender sus negocios mercantiles y «por padecer de almorranas», lo que se consideró siempre en Cádiz una burla. *Ibidem*, pág. 67.

³⁶ *Ibidem*, págs. 71 y 72.

³⁷ *Escritos presentados al gobierno español el año de 1809*, Cádiz, 1809. Cfr. Adolfo de Castro: *Cortes de Cádiz*, pág. 61. Meses más tarde, en noviembre de 1810, reunidas ya las Cortes en la Real Isla de León, José Manuel de Vadillo, en respuesta a unas opiniones vertidas por Juan Sánchez de la Madrid en el suplemento a *El Conciso* nº 37, escribía que, al discutir sobre la soberanía lo que convenía es separar los conceptos de soberanía y monarca, que a veces, erróneamente se confunden, y aclarar que la soberanía no pertenece al rey, citando como ejemplo, entre otros, el de monarquía visigoda, en la que la corona era electiva. Vadillo define la soberanía como: «la facultad de pactar, manifestar y alcanzar la observancia de los pactos acerca del modo y condiciones de su unión»; posteriormente insiste en que la soberanía de la nación «es la facultad legislativa para prescribirse los estatutos a que deben ajustarse todos y cada cual de sus individuos». Reafirma Vadillo que la soberanía no pertenece a los príncipes, ni por la fuerza, o por razón de conquista, ni por ser imágenes de Dios —lo es Adán y toda su descendencia— y tras realizar otras consideraciones históricas, concluye que un pueblo no puede renunciar a su soberanía, y que por tanto, el poder supremo legislativo reside en la nación. Cfr. D.M.C., 19 y 20/11/1810.

³⁸ *Ibidem*, págs. 64 y 65. Vadillo planteaba que, en consideración al número de contribuyentes, las distancias y las dificultades y gastos de los viajes, una representación de cincuenta diputados de ultramar era suficientemente significativa.

³⁹ *Ibidem*, págs. 64 y 65.

⁴⁰ *Españoles*. Real Isla de León, 29 de Enero de 1810.

⁴¹ «[el gobierno] resigna gustoso el poder y la autoridad que le

confiasteis, y la traslada a las manos del Consejo de Regencia, que ha establecido por el Decreto de este día».

Si el Decreto estaba firmado por 21 vocales, según indica Manuel Morán Orti (Art. cit., pág. 32), el manifiesto lo suscriben 23.

⁴² Desde febrero hasta agosto, presidió el Consejo de Regencia Castaños, y el 1 de Agosto, le sustituyó en la presidencia el obispo de Orense, que se había incorporado a la Regencia a fines de Mayo. Cfr. Rafael Flaquer Montequi: «El Ejecutivo en la revolución liberal». *Ayer*, 1, 1991, pág. 44

⁴³ Lardizábal sustituyó a Esteban Fernández de León, quien, elegido en primera instancia, renunció por problemas de salud. Adolfo de Castro: *Historia de Cádiz*, págs. 688 y 689.

⁴⁴ A.H.M.C., Ac. cap., 26-1-1810.

⁴⁵ Adolfo de Castro: *Historia de Cádiz*, pág. 684.

⁴⁶ No entraremos en detalle sobre como finalmente la Junta de Cádiz aceptó reconocer la autoridad soberana de la Regencia, que para lograrlo intervino, en nombre de Gran Bretaña, el marqués de Wellesley insistiendo en la necesidad de contar con un gobierno fuerte y centralizado, y, sobre todo, que la Regencia cedió a la Junta Superior de Cádiz el control de la Hacienda el mismo 28 de enero de 1810, lo que se confirmó por contrato firmado el 31 de marzo, y se mantuvo hasta octubre de ese mismo año, ya constituidas las Cortes.

⁴⁷ «[...] la autoridad soberana depositada en la Junta Central lo está ahora en un Consejo de Regencia, y que nuestros esfuerzos deben comenzar de nuevo a organizar la máquina de la resistencia contra el enemigo».

⁴⁸ Jaime E. Rodríguez O.: *La independencia de la América española*. Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pág.

148. Sergio Guerra Vilaboy: *El dilema de la independencia. Las luchas sociales en la emancipación latinoamericana (1790-1826)*. Fundación Universidad Central, Santa Fé de Bogotá, 2000, págs. 89 y ss.

- ⁴⁹ Demetrio Castro: «La obra de agitación reformista de la Central en su segunda época (1809-1810) y su efecto en América». En: *Emancipación y nacionalidades americanas. Historia General de España y América*, t. XIII, Madrid, 1992, pág. 130.
- ⁵⁰ Sobre este asunto, Rafael Flaquer Montequi: «El ejecutivo en la revolución liberal». En Miguel Artola (ed.): *Las Cortes de Cádiz*, Ayer, n1, 1991, pág. 47.
- ⁵¹ No entraremos en los debates, ni tampoco a glosar la justificación historicista que se incluyó en el *Discurso preliminar*.
- ⁵² Como ha señalado Miguel Artola, la Constitución de Cádiz fue la primera en identificar la nación y en dar una descripción del estado-nación. Cfr. Miguel Artola: *Constitucionalismo en la historia*. Crítica, Barcelona, 2005, pág. 85.
- ⁵³ Miguel Molina Martínez: «De cabildos a ayuntamientos: las Cortes de Cádiz en América». En: Izaskun Álvarez Cuartero y Julio Sánchez Gómez (ed.): *Visiones y Revisiones de la Independencia Americana. La Independencia de América: La Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, págs. 133 a 155.
- ⁵⁴ Antonio Annino, «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821». A. Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1995, págs. 177-226. El proceso es bien analizado para Centroamérica por Sajid Alfredo Herrera Mena: *La herencia gaditana. Bases tardío-coloniales de las municipalidades salvadoreñas. 1808-1823*. Op. Cit.

- ⁵⁵ Demetrio Ramos: «América en las Cortes de Cádiz, como recurso y esperanza». *Gades*, 16, 1987, pág. 116 y 117.
- ⁵⁶ No hay que olvidar que antes que la Constitución española de 1812 promulgada en Cádiz en América se promulgaron la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811, de clara influencia norteamericana en la constitución federal del estado, y la Constitución de Quito de 15 de febrero de 1812, que en algunos aspectos y conceptos tiene similitudes a la de Cádiz.
- ⁵⁷ Mario Rodríguez: *El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826*, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pág. 108. Sobre la influencia de Cádiz en Centroamérica, Jorge Mario García Laguardia: *Centroamérica en las Cortes de Cádiz*. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.
- ⁵⁸ Vicente de Paulo Barreto: «A Constituição de Cádiz e as origens do constitucionalismo brasileiro». En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, págs. 334 a 347.
- ⁵⁹ Héctor Gros Espiel: «La Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución del Reino de Portugal de 1822, la Constitución del Imperio de Brasil y la Constitución de Argentina de 1826 como precedentes de la Constitución uruguaya de 1830». En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, págs. 97 a 119.

- ⁶⁰ Sobre la gestación diplomática del Tratado y sus efectos, Ana María Schop Soler: *Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia, 1733-1833*. Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, Madrid, 1984, pp. 107 a 130.

También da noticia del tratado José Presas: *Cronología de los sucesos mas memorables ocurridos en todo el ambito de la. monarquia española desde el año 1759 hasta 1836*. Madrid, 1836, p. 81. Y Manuel Marliani: *Reseña de las Relaciones Diplomáticas de España, desde Carlos I hasta nuestros días*. Madrid, 1841, p. 161 y 162. Igualmente, Carlos Marx y Federico Engels en sus artículos sobre «La España revolucionaria», publicados en el *New York Daily Tribune*, citan el tratado. Cfr. Carlos Marx y Federico Engels: *Sobre España*. Ed. Progreso, Moscú, 1980, p. 26.

- ⁶¹ Eduardo R. Eggers y Enrique Feune de Colombí: *Francisco de Zea Bermúdez y su época (1779-1850)*. Madrid, 1958. Lo relacionado con el tratado en, pp. 39 y ss.

- ⁶² La Cortes, en la sesión del 8 de septiembre de 1812, conocieron el tratado, cuyo texto se recoge en el Diario de Sesiones, mostrando su satisfacción por la firma y ordenando a la Regencia su publicación. Cfr. Diario de Sesiones (DS.), 8/9/1812. La noticia de la ratificación del tratado, a principios de noviembre, la conocieron las Cortes el 16 de diciembre. Cfr. DS., 16/12/1812. También recoge el texto el Conde de Toreno: *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*. Paris, 1838, t. III, p. 378.

- ⁶³ Allan Brewer-Carias: *La constitución de Cádiz de 1812 y los principios del constitucionalismo moderno: su vigencia en Europa y en América*.

<http://www.allanbrewercarias.com/Content/>

- ⁶⁴ Algunos ejemplos en Juan Ferrando Badía: «Proyección exterior de la Constitución de 1812». En: *Ayer*, nº 1, 1991, p. 218.
- ⁶⁵ Irene Castells Oliván: «La Constitución gaditana de 1812 y su proyección en los movimientos liberales europeos del primer tercio del siglo XIX». En: *Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea*, nº 1, 1989, p. 120.
- ⁶⁶ Jorge Martins Ribeiro: «La importancia de la ideología y de los artículos de la Constitución de Cádiz para la eclosión de la Revolución de 1820 en Oporto y la Constitución Portuguesa de 1822». En Alberto Ramos Santana y Alberto Romero Ferrer (eds.): *Cambio político y cultural en la España de Entresiglos*. Universidad de Cádiz, Cádiz, 2008, pp. 79 a 87. Jorge Miranda: «A constituição portuguesa de 1822». En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, págs. 376 a 387.
- ⁶⁷ Andrea Romano: «L'influenza della carta gaditana nel costituzionalismo italiano ed europeo». En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, págs. 352 a 373.
- ⁶⁸ Vittorio Scotti: «La Constitución de Cádiz y las revoluciones italianas en Turín y Nápoles de 1820 y 1821». En Alberto Gil Novales (ed.): *La revolución liberal*. Ed del Orto, Madrid, 2001, pp. 257-262. Del mismo autor «El liberalismo espa-

ñol e Italia: un modelo de corta duración». En Emilio La Parra y Germán Ramírez: *El primer liberalismo. España y Europa, una perspectiva comparada*. Generalitat Valenciana, Valencia, 2003, pp. 315-340.

- ⁶⁹ Gonzalo Butrón Prida: *Nuestra sagrada causa. El modelo gaudiano en la revolución piemontesa de 1821*. Fundación Municipal de Cultura, Cádiz, 2006.
- ⁷⁰ Carsten Goehrke y otros: *Rusia*. Siglo XXI, Madrid, 1975, p. 197.
- ⁷¹ Para el contexto europeo de este proceso en Rusia, sigue siendo útil el clásico Eric J. Hobsbawm: *Las revoluciones burguesas*. Guadarrama, Madrid, 1971, pp. 209 y ss.
- ⁷² Cfr. Juan Ferrando Badía: «Proyección exterior de la Constitución de 1812», p. 248.
- ⁷³ Sobre la influencia de los sucesos españoles de 1808, 1812 y 1820 en el movimiento decembrista, así como la importancia del ejemplo de Rafael del Riego, Ana María Schop Soler: *Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia, 1733-1833*, pp. 401 a 442.
- ⁷⁴ El periódico oficial español *Mercurio de España*, de marzo de 1826, pp. 167 a 170, publicó el comunicado de Nicolás I «emperador y autócrata de todas las Rusias», sobre «el lastimoso acontecimiento», explicando la versión oficial y el castigo impuesto a los insurrectos, que serviría para purificar del «contagio extranjero el suelo sagrado de Rusia». Tras el texto oficial del zar, se incluyó una nota aclaratoria del gobierno ruso.
- ⁷⁵ Por mandato expreso de Fernando VII se publicó en España el *Informe presentado a S.M. el Emperador de Rusia por la Comisión de pesquisas sobre los acontecimientos del 26 de diciembre de 1825, en San Petersburgo*. Imprenta Real, Madrid,

